

Comercio ambulante: el día después

Catalina Zagal

Investigadora del Centro de Políticas Públicas UC



La intervención en barrio Meiggs marca un punto de inflexión. No solo por el despliegue policial o el derribo de toldos, sino por la promesa de continuidad con que se aborda esta respuesta al comercio ambulante. Porque si algo hemos aprendido es que este problema es el síntoma visible de un entramado más profundo que involucra empleo, diseño urbano y gobernanza territorial.

El comercio ambulante ha crecido al ritmo de la inflación, el desempleo, la informalidad, las brechas migratorias y de género. Según un estudio que realizamos en 2023 entre el Centro de Políticas Públicas UC, la Cámara Nacional de Comercio y el Gobierno de Santiago, muchas personas que hoy venden en la calle no lo hacen por azar: obtienen ingresos superiores al salario mínimo, compatibilizan horarios con el cuidado de otros y evitan condiciones laborales a veces más precarias.

Más de la mitad no dejaría la actividad aunque se les ofreciera un empleo formal. Además, comprobamos que los compradores también actúan en favor de este comercio: más del 90% está satisfecho con su compra y sobre el 80% volvería a hacerlo, incluso si hubiera riesgo de sanción. Acciones como las desplegadas en Meiggs no deben evaluarse sólo por su efecto inmediato: deben entenderse como parte de un proceso de mediano y largo plazo. Si sólo se desocupan calles sin atender las causas estructurales, el fenómeno se trasladará.

La sostenibilidad del operativo exige, al menos, tres elementos clave. Primero, articulación interinstitucional e intercomunal. Segundo, una estrategia focalizada: no todo comercio ambulante es igual ni todos los territorios son afectados por la misma complejidad. Es clave distinguir entre activi-

dades delictuales y aquellas susceptibles de regularización, así como los puntos más críticos. Tercero, un enfoque colaborativo y de innovación urbana: el espacio público no puede pensarse solo desde la exclusión. Es urgente pilotear soluciones como zonas reguladas, rediseño urbano y conexión con la generación de empleos.

“El despeje policial o el copamiento temporal deben entenderse como parte de un proceso de mediano y largo plazo”.

Tampoco podemos perder de vista a quienes abastecen el comercio informal: bodegas ilegales, redes logísticas y canales de ingreso de productos falsificados. Es clave cortar esa cadena. Y si la hipótesis es que hay redes de crimen organizado detrás, se requieren intervenciones sostenidas que investiguen y restituyan la legitimidad estatal en el territorio. Si queremos una ciudad más segura y justa, no basta con despejar personas de las veredas, se trata de construir con ellas una ciudad habitable para todas y todos.